



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	YAMILE DEL SOCORRO ATEHORTÚA MORALES
DEMANDADAS	COLPENSIONES Y PROTECCIÓN S.A.
ORIGEN	Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	050013105006-2017-00373-01
TEMAS	Ineficacia de traslado de régimen pensional
CONOCIMIENTO	Consulta
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha y hora señaladas, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 15 del Decreto 806 de 2020 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por YAMILE DEL SOCORRO ATEHORTÚA MORALES contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- y PROTECCIÓN S.A.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda<sup>1</sup>

La señora Yamile del Socorro Atehortúa Morales formula demanda contra Protección S.A. y Colpensiones, pretendiendo **i)** se declare la ineficacia o en subsidio suyo, la nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS- a través de Protección S.A., por haber omitido su deber de información y **ii)** se disponga su reactivación en el Régimen de Prima Media -RPM- administrado por Colpensiones, sin solución de continuidad. Como consecuencia de ello, se condene a **iii)** Protección S.A. a trasladar todos los aportes más rendimientos, con equivalencia de semanas hacia Colpensiones **iv)** las costas y agencias en derecho a cargo de las demandadas.

<sup>1</sup> Fls.2/4,114/115

En subsidio de las pretensiones de ineficacia y nulidad, pretende **i)** se declare su derecho a trasladarse al RPM, a través de Colpensiones, en virtud de la petición elevada en ese sentido el 12 de marzo de 2012 y como consecuencia de ello, se condene a **ii)** Protección S.A. a trasladar todos los aportes más rendimientos, con equivalencia de semanas hacia Colpensiones **iii)** las costas y agencias en derecho a cargo de las demandadas.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el 19 de abril de 1966; inició cotizaciones ante el extinto Instituto de Seguros Sociales -ISS- el 19 de noviembre de 1985, trasladándose a Protección S.A. el 27 de octubre de 1994, al iniciar labores para la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia, sin que haber recibido asesoría por parte de promotores de la referida administradora. El 7 de marzo de 2012 radicó formulario de vinculación ante el ISS, sin que le hubieran dado respuesta. En septiembre de 2016 solicitó traslado hacia Colpensiones, siendo negada la petición en razón de su edad.

### **Oposición a las pretensiones de la demanda**

Las demandadas se opusieron oportunamente a las pretensiones de la demanda, así:

#### **i. Colpensiones<sup>2</sup>**

Al no haber incumplido Protección S.A. con las obligaciones que le asistían, debe entenderse que la afiliación de la demandante es válida, no siendo viable un nuevo traslado, pues es ella se encuentra a menos de diez (10) años de alcanzar la edad mínima para pensionarse. Excepcionó prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas e inexistencia de ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad.

#### **ii. Protección S.A.<sup>3</sup>**

La afiliación de la demandante ante Protección S.A. es válida, pues se llevó a cabo de manera informada, libre, espontánea y sin presiones, previo suministro de una asesoría integral completa, teniendo en cuenta las implicaciones de la decisión. Colpensiones nunca presentó el formulario a que refiere la reforma a la demanda, por tanto no hay lugar a ordenar el traslado deprecado. Excepcionó cumplimiento de los requisitos formales en la afiliación, asesoría adecuada y correcta, acto existente jurídico y válido, ausencia de vicios del consentimiento, ausencia de causa para pedir, convalidación y ratificación de la afiliación al régimen de ahorro individual, prescripción de la acción de nulidad del acto jurídico, buena fe y prescripción.

---

<sup>2</sup> Fls.38/41, 124/129

<sup>3</sup> Fls.52/77, 131/133

### **Sentencia de primera instancia<sup>4</sup>**

El 29 de abril de 2019, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia ordenando a Colpensiones impartir trámite a la solicitud de traslado de régimen pensional radicada el 7 de marzo de 2012, comunicándolo a Protección S.A., a efectos de que opere el referido traslado hacia el RPM y se proceda al traslado del saldo existente en la cuenta de ahorros de la demandante por concepto de aportes y rendimientos, así como la historia laboral completa y detallada de semanas y salarios. Una vez se traslade el dinero, Colpensiones deberá actualizar la historia laboral de la demandante y ponerla en su conocimiento. Concedió a Colpensiones el término de un (01) mes para dar cumplimiento a la orden y a Protección S.A., el de diez (10) días. Condenó a ambas demandadas a pago de costas procesales, fijando como agencias en derecho, la suma de un millón de pesos (\$1.000.000) a cargo de cada una.

Consideró que no hay lugar a considerar que la afiliación ante el RAIS es ineficaz, pues la demandante confesó haberse afiliado ante Protección S.A., por la facilidad de acercarse a sus oficinas y recibió reasesoría en el año 2013, decidiendo continuar afiliada a Protección S.A. luego de más de dos décadas contadas desde el traslado. Estimó que Protección S.A. no demostró el cumplimiento del deber de información al traslado, pero decidió no continuar con el análisis de las consecuencias de esta omisión, al encontrar viable que se emita pronunciamiento frente al formulario en que la demandante solicitó su retorno al ISS en el año 2012, cuando contaba con 46 años de edad y podía válidamente retornar al RPM.

El proceso fue remitido en **Consulta**. Las partes se abstuvieron de formular apelación.

### **Alegatos de conclusión en segunda instancia**

Una vez corrido el traslado para alegar en esta instancia, Protección S.A. guardó silencio y la parte demandante remitió memorial extemporáneamente, por tanto no hay lugar a que la Sala se pronuncie sobre éste<sup>5</sup>.

Por su parte, **Colpensiones** recorrió oportunamente el traslado, solicitando confirmar la sentencia de primera instancia, por haberse acreditado que no asiste razón a la demandante, al haberse realizado el traslado hacia Protección S.A. conforme a la regulación vigente en ese momento.

---

<sup>4</sup> Fls.148/149.

<sup>5</sup> El auto mediante el cual se corrió traslado para alegar se notificó por estados del 6 de noviembre de 2020, precisando a las partes que el término de cinco (05) días era común y correría entre el 9 y el 13 de noviembre de 2020. El memorial de la parte demandante fue remitido vía correo electrónico el 23 de noviembre de 2020.

## II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala se surte en grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia con radicado 7382 de 2015.

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por las demandadas, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver consiste en determinar: **a)** La viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS; de ser afirmativa la respuesta, **b)** se precisarán las consecuencias de dicha declaración y qué conceptos deberá trasladar las AFP del RAIS demandadas a Colpensiones, dado que el fundamento fáctico de las pretensiones de la demanda es la carencia o indebida asesoría, lo que al tenor del art. 271 de la Ley 100 de 1993, ocasionaría no la nulidad, si no la ineficacia del acto jurídico, como también se pretendió en la demanda.

De considerarse que el acto de traslado fue eficaz y produjo efectos jurídicos, la Sala abordará la pretensión subsidiaria, determinando si la solicitud del 7 de marzo de 2012 fue presentada oportunamente, debiendo procederse a un nuevo traslado de régimen pensional, con destino al RPM y las consecuencias que de allí se derivan.

### Hechos relevantes probados documentalmente

- Yamile del Socorro Atehortúa Morales nació el 19 de abril de 1966 (fl.17).
- Suscribió solicitud de traslado de régimen pensional el 27 de octubre de 1994 con destino a la AFP Protección S.A., radicado el 16 de noviembre de 1994 (fl.80).
- El 7 de marzo de 2012 solicitó afiliarse ante el extinto ISS (fl.117). En el expediente no obra respuesta a esta petición.
- El 9 de abril de 2013, recibió reasesoría por parte de Protección S.A., decidiendo permanecer en esa AFP (fl.85).
- El 16 de septiembre de 2016 radicó formulario de afiliación ante Colpensiones, siendo negada el 19 de septiembre del mismo año, por encontrarse a diez años o menos del requisito de tiempo para pensionarse. En el mismo documento le informaron que no está multivinculada, si no válidamente afiliada a Protección S.A. (fls.33/34).
- De acuerdo con documentos emitidos por la OBP el 02 de noviembre de 2016 y el 28 de diciembre de 2017, inició cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones desde el 19 de noviembre de 1985, ante el extinto ISS (fls.25/26,83/84).

- Según consulta SIAFP del 28 de diciembre de 2017, la hoy demandante presenta afiliación inicial al Sistema General de Pensiones, a través del RAIS, ante Protección S.A. desde el 27 de octubre de 1994 (fls.81/82).

- Según documento expedido por Protección al hacer la proyección de la mesada de la hoy demandante, esta contaba al 2 de noviembre de 2016, con 931.29 semanas, de las cuales 47 fueron cotizadas en momento anterior a la afiliación al RAIS (fls.18,89).

#### **a) Viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS**

Con la finalidad de determinar la eficacia o ineficacia de la afiliación al RAIS por parte del demandante, es menester acudir a los siguientes preceptos normativos que regulan la materia:

i) Los artículos 48<sup>6</sup>, 53, 335<sup>7</sup> y demás normas concordantes de la Constitución Política; ii) La Ley 100 de 1993 en sus artículos 1<sup>8</sup>, 3, 4, 10, 12, 13 literal b, Inciso 3º del Literal c) del artículo 60, 90, 97, 271; iii) Artículo 4 y demás normas concordantes del Decreto 656 de 1994<sup>9</sup>; iv) Decreto 692 de 1994; v) El Decreto 663 de 1993, cuyo artículo 72 en su literal f) adicionado por el art. 12 de la Ley 795 de 2003, contiene prohibiciones expresas<sup>10</sup> para las entidades del sector financiero entre ellas las AFP; y vi) los arts. 4, 10, 12 y demás concordantes del Decreto 720 de 1994<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Las actividades que desarrollan las AFP al tenor del **artículo 335 de la CN.**, son de interés público y su ejercicio está reglamentado por la ley, en razón de la función que desempeñan.

<sup>8</sup> Consagró el artículo primero de esa ley 100, como objeto del aludido sistema: *garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad “para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan.”*

<sup>9</sup> Conforme al **artículo 4** y demás normas concordantes del **Decreto 656 de 1994**, las administradoras se sitúan en el ámbito de la **responsabilidad profesional**, que **las obliga a prestar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios** inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, considerados idóneos por sus conocimientos técnicos especializados y experiencia en compleja materia financiera, para garantizar derechos de sus asegurados; tal responsabilidad se mide con mayor rigor que el utilizado frente a las obligaciones entre particulares, en razón a la delegación del servicio público de seguridad social en pensiones que asumen en el RAIS, sostiene la SCL de la H. Corte Suprema

<sup>10</sup> Se les prohíbe: **“No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas”.**

<sup>11</sup> Norma reglamentaria de los arts. 105 y parcialmente del 287 de la ley 100 de 1993 en cuanto al régimen de promoción y de responsabilidad de las sociedades AFP. disponiendo en el inciso final del artículo 4: **QUE LAS ACTUACIONES DE LOS VENDEDORES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD OBLIGAN A LAS AFP** , respecto de la cual se hubiere promovido la respectiva vinculación, es decir, comprometen la responsabilidad de éstas como establece su art. 10 y precisa en el art. 12 que tales promotores deben suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante la vinculación, y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.

La referida temática del asunto bajo estudio ha sido decantada suficientemente por la H. Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, quien ha construido y enriquecido el precedente judicial que viene acogiendo esta Sala de Decisión Laboral, por compartir la postura desarrollada por la Alta Corporación en torno a la eficacia de la afiliación inicial y/o el traslado de régimen pensional con destino al RAIS.

Dicho precedente, conformado entre otras por las sentencias 31989 de 2008, 31314 de 2008, 33083 de 2011, 46292 de 2014, 17595 de 2017, 19447 de 2017, 4296 de 2018, 1421 de 2019, 1452 de 2019 y 1688 de 2019, se fundamenta en la necesidad de determinar si en cada asunto concreto, la AFP receptora de la afiliación, satisfizo tanto para ese momento, como durante la vigencia de la relación con quien demanda la ineficacia, el deber de información que le asiste, de acuerdo a lo previsto en el Decreto 663 de 1993, aplicable a las AFP desde su creación, en el que se prescribió en el numeral 1.º del artículo 97, la obligación de las entidades de “*suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen*”.

Al respecto, la jurisprudencia tiene en cuenta el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el literal b) del artículo 13 de misma norma, según la cual, los trabajadores tienen la opción de elegir *libre y voluntariamente* el régimen pensional que mejor le convenga y consulte sus intereses, razón por la cual, si alguna persona jurídica o natural atenta en cualquier forma contra el derecho de afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social, se genera como consecuencia la ineficacia de la afiliación.

Se ha considerado por diferentes Salas de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín que, si bien los casos concretos abordados por la H. Corte Suprema de Justicia, refieren a personas que fueron beneficiarias del régimen de transición pensional consagrado en el art. 36 de la Ley 100/93, su *ratio decidendi* aplica para quienes se afilian al Sistema Pensional por primera vez o se trasladan entre regímenes en el marco del mismo, pues la eficacia de la afiliación, y recaba en que se demuestre en cada proceso si la AFP suministró, a quien una vez fuera su potencial afiliado, *información clara, completa, suficiente*, en términos de transparencia y eficiencia, de manera que pueda concluirse que la decisión adoptada entonces, obedeció a un conocimiento diáfano y preciso, no sólo de lo que se hacía, sino de las consecuencias que se derivarían de la suscripción del formulario de afiliación correspondiente y que por tanto, ese acto jurídico surgió de una real manifestación de voluntad, libre, espontánea y sin presiones.

Según lo anterior, tal y como reitera la H. CSJ en sentencia SL 1688-2019-68838, es deber del fondo brindar una información oportuna y adecuada, ello, indiferentemente de si se tiene o no derechos consolidados, o beneficio transicional, si se está próximo a adquirir requisitos para pensionarse, “dado que la omisión al deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo”, (subrayas fuera de texto.)

---

En tal sentido, la responsabilidad de las Entidades Administradoras de Pensiones en esta etapa preparatoria a la decisión de afiliación o traslado es de CARÁCTER PROFESIONAL: **i)** Por la alta complejidad de la información que se debe analizar antes de la afiliación o traslado; **ii)** Por los derechos constitucionales que se encuentran comprometidos: La seguridad social y el derecho pensional, de carácter irrenunciable; **iii)** Porque se trata de una actividad que concierne a intereses públicos; **iv)** Porque debe primar en su comportamiento y decisiones, una ética de responsabilidad social, transversal a todo su quehacer, de manera que prime el interés colectivo que se realiza en cada persona que se afilia, sobre el interés particular que tenga la entidad, de alcanzar sus metas de crecimiento y beneficios económicos.

La carga de la prueba asiste a la AFP a quien se acuse de incumplir con el deber de información; y ello es así, porque el análisis parte de la afirmación indefinida sobre la ausencia del cumplimiento de ese deber.

Mediante la prueba documental evidencia que Yamile del Socorro Atehortúa Morales nació el 19 de abril de 1966 (fl.17), por lo que, al 01 de abril 1994, cuando inició vigencia el SGSSP para ella, por ser trabajadora particular del orden privado, cesante,<sup>12</sup> no alcanzaba los 35 años de edad, ni 15 años de servicios y/o cotizaciones, por tanto, nunca fue beneficiaria del régimen de transición consagrado en el art. 36 de la Ley 100 de 1993.

Suscribió solicitud de traslado de régimen pensional hacia Protección S.A. el 27 de octubre de 1994<sup>13</sup> y aunque en dos oportunidades solicitó el retorno al RPM administrado por Colpensiones, la primera de las peticiones no fue resuelta – o al menos, no obra prueba de ello en el expediente- y la segunda solicitud fue negada por encontrarse a menos de 10 años para alcanzar el requisito mínimo de edad para acceder a una pensión de vejez en dicho régimen.<sup>14</sup>

Protección S.A. no aportó documental que plasme en su contenido la asesoría que dice haber brindado a la señora Atehortúa Morales en momento anterior a la suscripción del formulario de afiliación, siendo llamada esta demandada a demostrar que ese traslado de régimen no se vio afectado en su eficacia al suministrar la información suficiente, clara, completa al entonces potencial afiliado. Si bien aportó documento de re asesoría, no se allegaron soportes de la información brindada a la afiliada en ese momento y aunque se hubiera demostrado el cumplimiento de su deber en ese momento, no se demostró cual fue la información que haya brindado antes de suscribir el formulario de traslado de régimen pensional que se acusa de ineficaz y que, por lo dicho, no es saneable con una asesoría posterior.

Adicionalmente, se practicó interrogatorio a la demandante, sin que se produjera confesión de su parte, manifestando en torno a las condiciones presentadas al

---

<sup>12</sup> Fls. 25/26,83/84

<sup>13</sup> Fl.80

<sup>14</sup> Fls.33/34, 117.

traslado hacia el RAIS, que ocurrió cuando inició el año rural, los afiliaron colectivamente a Protección S.A. porque les dijeron era más fácil así, que hacer afiliaciones individuales, pero no recuerdo asesoría puntual en los términos en que se ha dejado indicado en esta providencia.

Lo anterior, permite concluir en que la pasiva no demostró la satisfacción de su ineludible deber legal de brindar a la hoy demandante una oportuna información adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto a la vinculación en los dos regímenes pensionales; ni sobre los beneficios e inconvenientes que les generaría el suscribirse a un régimen o a otro, y en general, las consecuencias del tal afiliación, entre ellas, las modalidades de la pensión, el capital necesario para acceder a la pensión de vejez de manera ordinaria, o anticipada, los componentes y variables para establecer el monto de la prestación económica en el RAIS y su comparativo en el RPM, los requisitos para heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento, el derecho de retracto, las implicaciones de la negociación anticipada del bono pensional, la posibilidad e incluso la necesidad de hacer cotizaciones adicionales, para obtener la prestación de vejez en el RAIS, entre otros aspectos relevantes, para generar en la posible afiliada, verdadero consentimiento plenamente informado y por tanto, libre y voluntario en la selección o traslado de régimen de pensiones, y ese deber de información es exigible en cada etapa de la afiliación y ejecución del acto jurídico, como bien ha dilucidado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, no siendo necesario revisar las condiciones de afiliación ante las restantes AFP del RAIS demandadas en este proceso, pues la ineficacia del traslado de régimen, afecta todo traslado entre administradoras que se haya presentado con posterioridad.

Tales motivaciones permiten **revocar** la sentencia conocida en apelación.

#### **b) Consecuencias de la declaratoria de ineficacia**

Ahora, atendiendo al grado jurisdiccional de consulta y al principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, para que COLPENSIONES cuente con los recursos necesarios para asumir en momento posterior el pago de la pensión de vejez de la hoy demandante, se ordenará a **Protección S.A.**, AFP del RAIS,- que dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia, debe trasladar a COLPENSIONES **la totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante todo el tiempo en que la señora Atehortúa Morales figuró como afiliada al RAIS.

Protección S.A. trasladará a Colpensiones, los valores descontados al demandante por concepto de aportes para la Garantía de Pensión Mínima, sumas adicionales de las aseguradoras y comisiones de administración, durante el tiempo de su afiliación, pues sus promotores incumplieron el deber de información que condujo a su respectiva afiliación y permanencia en el RAIS.



Se debe anotar que esta Sala de Decisión se abstenía de ordenar que las AFP del RAIS remitan, con destino a Colpensiones, los valores correspondientes a las sumas adicionales de las aseguradoras, entendiendo estos conceptos como los girados con miras a garantizar las eventuales prestaciones consecuenciales de la ocurrencia de los riesgos de invalidez y muerte.

Pese a lo anterior, examinado nuevamente el precedente judicial de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, observa esta Sala que a partir la sentencia con radicado 31989 de 2008 en la cual se fundamenta la *ratio decidendi* de estos procesos, esa Alta Corporación determinó que por efecto de la entonces denominada nulidad, hoy ineficacia, generada con ocasión del actuar negligente de las AFP del RAIS, en materia de información, éstas se encuentran obligadas a remitir a Colpensiones no sólo las cotizaciones, rendimientos, bonos pensionales, cuotas o gastos de administración, lo destinado a garantía de pensión mínima sino también las sumas adicionales de la aseguradora.

Dicha sentencia es de obligatoria cita en el proceso en que se ha discutido el tema de la ineficacia de la afiliación y el traslado de régimen pensional, siendo parcialmente trascrita en las sentencias que hemos mencionado con antelación, por lo que concluimos que hay lugar a variar la postura en torno a este punto concreto, adoptando en estricto sentido lo decidido por nuestro órgano de cierre en la materia.

Se precisa que también se deben trasladar a Colpensiones las cuotas de administración, puesto que la consecuencia de la declaratoria de la ineficacia, en asuntos como el abordado en este proceso, implica que la parte beneficiada económicamente con el acto ineficaz por omisión del deber de información y del buen consejo, garantice que el patrimonio de la parte inducida a la afiliación no sufra deterioro, y pueda disfrutar de las prestaciones del RPM, como si hubiera permanecido en él. Además, es menester que la orden judicial garantice, la no afectación financiera del régimen de prima media, para que pueda satisfacer las prestaciones que se generen a su cargo.

Ahora bien, si la suma de todos los conceptos a trasladar resultare inferior al valor total del aporte legal correspondiente más los rendimientos que se hubieran generado, en caso de que la demandante hubiera permanecido en el régimen de prima media, **la AFP del RAIS demandada**, deberá asumir el pago de la diferencia que hubiere.

El cumplimiento de tales órdenes será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con Protección S.A. sin trasladar consecuencias negativas a la actora.

Se ordenará a Colpensiones recibir el valor de los aludidos conceptos e incorporarlos como aportes pensionales en la respectiva historia laboral de la señora Atehortúa Morales.

### III. EXCEPCIONES

Las excepciones formuladas por las demandadas han quedado implícitamente resueltas, mereciendo especial pronunciamiento la de prescripción, la cual no operó, pues la ineficacia no está sometida a dicha figura, por conllevar la inexistencia del acto jurídico sobre el que recae.

#### IV. COSTAS

Conforme al numeral 4 del artículo 365 del C.G.P., al revocarse la sentencia, las costas de ambas instancia serán asumidas por Protección S.A., por haber sido quien incumplió el deber de información que condujo a la afiliación de la demandante al RAIS. Se tasan agencias en derecho en esta instancia en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente en 2021.

#### V. DECISION DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### RESUELVE

**PRIMERO: REVOCAR** la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, el 29 de abril de 2019, dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por YAMILE DEL SOCORRO ATEHORTÚA MORALES contra COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.

**SEGUNDO:** Declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional que YAMILE DEL SOCORRO ATEHORTÚA MORALES hizo a través de Protección S.A. el 27 de octubre de 1994, al suscribir el formulario de afiliación N°0170138.

**TERCERO:** Declarar que YAMILE DEL SOCORRO ATEHORTÚA MORALES se encuentra válidamente afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, actualmente administrado por Colpensiones, desde el 19 de noviembre de 1985, sin solución de continuidad.

**CUARTO:** Ordenar a PROTECCIÓN S.A. trasladar con destino a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, la totalidad de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante todos los años en que la demandante ha figurado como afiliada a dicho régimen.

Con cargo a sus propios recursos PROTECCIÓN S.A., trasladará los valores descontados a la actora, en ese lapso, por concepto de aportes para la garantía de pensión mínima, comisiones de administración con indexación y primas de seguros.

Pero, si la sumatoria de la totalidad de los valores que se ordena trasladar resultare inferior al valor total del aporte legal correspondiente más los rendimientos que se hubieran generado, en caso de que el demandante hubiera permanecido en el régimen de prima media, PROTECCIÓN S.A., deberá asumir el pago de la diferencia que hubiere, sin trasladarle consecuencias negativas a la demandante.

El cumplimiento de lo ordenado será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PROTECCIÓN S.A.

Se ordena a COLPENSIONES recibir de PROTECCIÓN S.A., los valores correspondientes a los conceptos aludidos e incorporarlos como aportes pensionales en la historia laboral de la demandante.

**QUINTO:** Costas en ambas instancias a cargo de Protección S.A. Se tasa como agencias en derecho en esta instancia, en el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente en 2021.

Se ordena notificar por estados y enviar copia de esta decisión al correo electrónico suministrado por los apoderados de las partes.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

Certifico que la anterior sentencia  
fue notificada por ESTADOS N°15  
fijados hoy 1° de febrero de 2021 a  
las 8:00AM  
  
\_\_\_\_\_  
El secretario